

EL RECUADRO

Las elecciones del pasado 28 de abril han supuesto un cambio considerable de la representación parlamentaria de las opciones políticas mayoritarias sin que, sin embargo, haya cambiado sustancialmente el equilibrio entre los grandes bloques ideológicos.

En síntesis, los resultados prolongan la ausencia de mayorías claras que arrastró nuestro Parlamento en las dos legislaturas anteriores y la necesidad de pactos que aseguren apoyos al futuro Ejecutivo.

Pero, también es un hecho que la gran mayoría de los votantes han respaldado candidaturas defensoras de la moderación, el respeto del marco constitucional y la unidad de España, premisas a partir de las que debe exigirse un diálogo con amplitud de miras para buscar la convergencia y alejarse de maximalismos que en nada mejorarían la situación.

Al margen de consideraciones tácticas o de oportunidad política, es necesario valorar las consecuencias que para la actividad económica puede tener la composición del Congreso de los Diputados en la nueva legislatura que se abrirá con la constitución de las cámaras el próximo 21 de mayo.

Desde un punto de vista estrictamente empresarial, el impulso a la actividad económica, es decir la creación de empleo y la generación de riqueza, necesitan estabilidad y previsibilidad, muy especialmente en un escenario económico para el que la incertidumbre política supone un riesgo añadido y en el que distintas amenazas exteriores pueden comprometer el avance registrado en los últimos años.

La inestabilidad y un permanente clima electoral, obstaculizan el desarrollo de las reformas y políticas, realmente serias y eficaces, que necesita nuestra economía para infundir confianza en los mercados, en los inversores y en las instituciones económicas internacionales, de modo que España siga siendo atractiva para la inversión productiva.

Más allá de las políticas cortoplacistas y el tacticismo, las empresas, muy especialmente las pequeñas y medianas, necesitan que la Política, con mayúsculas, afronte los grandes desafíos que para una economía desarrollada como la nuestra suponen la innovación, la financiación, la internacionalización, la eficiencia energética, la racionalización normativa, la digitalización y la gestión del capital humano.

Todos esos desafíos coinciden con un entorno nacional e internacional lleno de incertidumbres de todo tipo que la acción política y de gobierno debe contribuir, cuando menos a reducir. Esa es la exigencia de los ciudadanos y los sectores productivos que necesitan que no se pongan trabas a su iniciativa y su talento.

Prolongar la actual fase de crecimiento económico, que algunos indicadores comienzan a ver en riesgo, dependerá fundamentalmente de las medidas que se apliquen para mejorar la competitividad y la productividad de las empresas y la cualificación del capital humano y para eliminar los obstáculos de todo tipo que dificultan la actividad.

Las empresas y muy especialmente las del sector industrial, han sido las protagonistas indiscutibles de la recuperación de la economía y del empleo en los últimos años apoyadas en un proceso de reformas que debe continuar si se quiere prolongar el crecimiento económico y la creación de empleo que son los únicos instrumentos realmente útiles para asegurar el estado el bienestar.

Todo ello se vería beneficiado por la formación de un gobierno capaz de mantener las grandes líneas de la política económica y la senda de las reformas que han permitido cambiar la tendencia de nuestra economía y crear empleo. La responsabilidad de los partidos políticos y los agentes sociales debe ahora servir para infundir confianza